

Que la Justicia de la Union ampara y protege á D. Marcelino García Márquez, contra la Orden fecha 13 de Febrero de 1873 dictada por el C. Presidente del Ayuntamiento de San Pedro, relativa á que no haga uso de las aguas con que se ha regado el rancho de San Pablo.

Notifíquese, comuníquese, sáquense las copias de estilo para remitir con este juicio á quien corresponda.

Así lo decretó, mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado. Damos fé.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—De asistencia, *Bernardo Laredo.*—*Antonio D. Treviño.*

Es copia que certifico. Saltillo, Julio 15 de 1874.—*Lic. Mariano Sanchez Peña.*—De asistencia, *Bernardo Laredo.*—*Sixto Zepeda.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 19 de 1874.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Coahuila, por D. Marcelino García Márquez, vecino de Matamoros de la Laguna, contra una Orden del C. Presidente municipal de la Villa de San Pedro, que viola, en perjuicio del solicitante, una de las garantías consignadas en el art. 16 de la Constitucion de 1857; visto el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal y la sentencia del Juez de Distrito: con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitucion federal, se declara:

Que es de confirmarse y se confirma, por sus propios legales fundamentos, la sentencia del Juez de Distrito que otorgó el amparo al solicitante.

Devuélvanse estas actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de esta sentencia, para los efectos consiguientes, archivándose á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Su-

prema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Auza.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 19 de 1874.—*Enrique Landa*, secretario.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Nicolás Lozarin, Rafael Manriquez, Abraham Oliveros, Antonio Rangel y Cristóbal Soto, contra el Cefe Político de Apaseo, que los ha condenado á quince dias de prision y á servicio de policía y limpieza de las calles y sitios públicos.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Que habiendo creído haberse violado en sus personas las garantías individuales, los CC. Nicolás Lozarin, Abraham Oliveros, Cristóbal Soto, Antonio Rangel y Rafael Manriquez, han solicitado el amparo de la Justicia federal contra el hecho de habérseles impuesto la pena de desempeñar trabajos públicos, por el C. Cefe político de Apaseo.

La pena vino como consecuencia de no haber satisfecho la multa que el funcionario mencionado les impuso, con motivo de infracciones de los reglamentos de policía.

Arreglado el Código penal moderno al texto constitucional, manda que se hagan efectivas las multas sustituyéndolas con prision ó arresto.

Si así hubiera obrado por analogia el C. Prefecto de Apaseo, nada tendría de aten-

atorio á la Constitucion el acto de haber impuesto pena á los quejosos. Mas no es así, sino que los obligó á prestar trabajos forzados personales, que segun nuestras costumbres parecen hasta infamantes. En suma, los obligó á barrer la plaza pública, segar la alfalfa y asear las caballerizas de la policía. Así lo confiesa en su informe hasta cierto punto el Gefe político, cuando dice á fôjas 26, que los obligó á desempeñar trabajos de policía. ¿Y cómo se obliga á los CC. á desempeñar esos trabajos, cuando á ello se resisten? No de otro modo que empleando la fuerza brutal; y por lo comun, con la amenaza del látigo ó la vara.

La Constitucion en su art. 21, solamente autoriza á la autoridad política, á imponer un mes de reclusion en defecto de la multa.

Se encuentra pues, violado este art. por el C. Gefe político de Apaseo.

El art. 5º prohibe que se obligue á los CC. á prestar trabajos personales, y contra este precepto constitucional ha pecado el C. Gefe político de Apaseo.

Por lo que el Promotor fiscal pide, se conceda el amparo solicitado.

Querétaro, Mayo 24 de 1874.—*Luis Casañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, Agosto 26 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por los CC. Nicolás Lázaro, R. Manríquez, Abraham Oliveros, Antonio Rangel y Cristóbal Soto, contra la Gefatura política de Apaseo por haber mandado aprehenderlos y condenado á una reclusion de quince dias con trabajos de policía, por faltas al orden público; procedimiento que en opinion de los quejosos, viola los arts. 18, 21 y 22 de la Constitucion federal, mas los 16, 19 y 20, agregados en el segundo escrito de queja como objeto del ataque; vista la primera comunicacion de la Gefatura, resistiendo la suspension decretada; las pruebas y alegatos pro-

ducidos por los interesados y las que vinieron acompañadas al informe con justificacion; vistos los dictámenes fiscales en los que el Ministerio público pide el amparo para los quejosos y el encausamiento contra el C. Gefe político.

Resultando: que el dia 28 de Noviembre del año próximo pasado, la Gefatura dió orden por escrito (fôjas 41), para la aprehension de dichos CC. por haber sido acusados de ebriedad; de que habian corrido gallo sin la licencia correspondiente, y de otros desórdenes (informe de fôjas 26 y 41 citadas), habiendo sido multados en diez pesos todos, menos uno, que lo fué en cinco (fôjas 18 vuelta), segun las causas que quedan especificadas y conforme á los reglamentos municipales de policía (fôjas 27), y de no pagar dicha multa, quedaban todos condenados á 15 dias de reclusion con trabajos de policía, condenacion defendida segun el informe, por las leyes generales y particulares, la que efectivamente comenzaba á ser cumplida barriendo las calles y plazas, segando alfalfa etc. (interrogatorio de fôjas 70, 4ª pregunta, parte final), cuando el C. Juez 2º de Letras de Celaya, con arreglo á la ley de 22 de Mayo de 1884, proveyó (fôjas 6) la suspension, auto que fué desobedecido (fôjas 9 y 10), siendo al fin obsequiado en virtud del requerimiento hecho á la Gefatura del Departamento (fôjas 8 vuelta y 13).

Considerando en cuanto á los arts. 16, 18 y 19: que es inexacta y vaga la infraccion de ellos, segun ha sido alegado, pues por lo que hace al primero de estos artículos, los hechos son que la Gefatura de Apaseo, que es autoridad competente, dió la orden por escrito para la aprehension, no para cateo, fundada la aprehension, en causa legal, quedando á cargo del agente de policía, si los hubo, cualesquiera exesos cometidos fuera de lo ordenado; y por lo que hace á los otros dos de los mencionados artículos, aunque se dice á fôjas 18 que en cumplimiento de la ley quedan especificadas con minuciosidad

las infracciones, no hay de cierto mas que la cita de los artículos segun su número 18 y 19, notándose respecto á estos, los mismos defectos de vaguedad en el alegato.

Considerando en cuanto al art. 20: que si bien de este se dice con claridad en el segundo escrito de queja, (fojas 17 vuelta § 3º) que los quejosos no fueron carcados con sus acusadores, porque estos eran supuestos, tal aserto no aparece comprobado, y ni aun siquiera figura entre los puntos de prueba que ellos promovieron; siendo por otra parte, propio de la ley orgánica que reglamentase el art. 21 de la Constitución federal, señalar bajo que trámites haya de procederse en las correcciones.

Considerando: que la Gefatura de Apaseo, como autoridad política y administrativa que es, está facultada para imponer multas y prision, por el artículo 21 de la ley fundamental, quedando á las leyes locales resolver, si la acumulacion de penas hecha, (ascondiendo por esto á diez pesos la multa) sea ó no causa de responsabilidad, habiendo ademas una confusion muy extraviada, en aplicar á la demanda de amparo la primera parte de este art. 21, porque de que la Gefatura haya escrito en la orden de aprehension, "tumulto, heridas, ebriedad," no se sigue que se haya querido avocar el conocimiento de delitos que no son de su jurisdiccion; y de que no haya resultado exacta la denuncia en los términos en que le fué hecha, no se sigue que sea cuestion federal, examinar si á pesar de esto á ciencia cierta de que no habia tales delitos, siempre debió consignar á los aprehendidos al Juzgado, ni tampoco se sigue que debió dejar de conocer de faltas que sí eran de su competencia.

Considerando: que aunque el Código penal del Estado, (art. 36 frac. III) admite los trabajos de policía como pena, los cuales establece en estos términos (art. 43 frac. I): "El aseo y limpieza de las calles y plazas.....VI Los demas trabajos análogos que señale la autoridad respectiva," esta

legislacion, la sola que puede sostener la penalidad decretada contra los promovedes, debe abatirse al art. 21 de la Constitución, que limita en preceptos terminantes, la potestad correccional de las autoridades políticas ó administrativas, á las penas pecuniarias ó de reclusion; de modo, que habiendo obrado la Gefatura de Apaseo dentro de sus atribuciones, al multar á aquellos y ponerlos en reclusion, sí trasgredió la limitacion constitucional, al condenarlos á trabajos de policía.

Considerando bajo otros aspectos este caso de proteccion á las garantías individuales: que el aseo ó la limpieza de las calles y plazas, impuesto como castigo, es de suyo humillante, sin que la indiferencia con que es visto generalmente por los que lo sufren, pruebe otra cosa, que su propia abyeccion, ó bien acusa los cuidados puestos en aplicarlo á las últimas clases de la sociedad, hecho que arguye hasta que grado dicho castigo es un elemento naturalmente asociado á la vileza, y como es que tambien serviría de resorte movible á discrecion, para herir á aquellos que sientan la conciencia de resistir humillaciones.

Considerando en este concepto: que no está en las consecuencias constitucionales, que alguna ley pueda hacer daño en esta manera tan odiosa, cual es exhibir á un culpable de faltas, en espectáculo, ante el que la risa sería implacable, ó el mismo silencio no atestiguaria mas que la afrenta respetada, y que la ley, Código ó reglamento de policía que á tales befas dé ocasion, rebaja, no las susceptibilidades del rango, cosa que sería convencional, sino que ultraja la dignidad del hombre.

Considerando: que no bastaría argumentar que en estas penas ó correcciones se obrase sin distincion; porque desde luego en contrario tenemos, como una educacion mas liberal, levantar á los abyectos, y sobre todo, por la razon absoluta de que los principios de igualdad llevan á subir el nivel, y que á este respecto, no consis-

te en rebajar á nadie en la escala del derecho reconocido en las instituciones, á la dignidad personal.

Considerando: que al abolir estas en su art. 22, las penas infamantes, no es que solamente hayan obligado á las antiguas leyes á que abdicasen aquel su empeño por definir cuales eran infamias y cuales no fueran, asunto de declaracion oficial, sino que han querido enseñar los fueros de la dignidad humana, para que el legislador en la sancion de sus mandamientos, la enaltezca y sostenga, entendido que las consideraciones de esta sentencia, hacen relacion, no á los trabajos impuestos á todo reo, sino que en este negocio, se refieren á castigos viles y soportados en pública espectacion.

Considerando: que serían vanos los intentos de una autoridad que pretendiese haber dejado inmunes los respetos personales debidos al ciudadano, despues de affigirle en contra, el ridículo, (cual si posible fuese sustraerlo á la tiranía de la opinion) y que es un espíritu constitucional muy marcado, exaltar la delicadeza de los sentimientos que sean dignos; así es que la mira está cumplida en despertarlos, si viven amortiguados, y el peligro de la infraccion, en exponerlos á vilipendio.

Por todas estas razones, y de conformidad con el pedimento fiscal, este Juzgado falla:

1º: Que la Justicia de la Union ampara y protege á los CC. Nicolas Lazarin, Cristobal Soto, Rafael Manriquez, Abraham Oliveros y Antonio Rangel, contra los procedimientos de la Jefatura política de Apaseo, que los condenó á barrer las calles y plazas, y á otros trabajos de policía, violando así el artículo 21 de la Constitucion, que no la autoriza para imponer estas correcciones, y el 22 que las prohíbe, porque imprimen infamia.

2º: Por cuanto el C. Domingo Rábago, Gefe político del partido de Apaseo, desobedeció el auto de suspension, devueltos que fueran los autos por la superioridad, sáque-

se testimonio de lo conducente para proceder á lo que en derecho haya lugar.

Notifíquese á quienes corresponda, por los medios legales; publíquese en el periódico oficial del Estado, y previa citacion, remítanse estos autos para su revision á la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

Así definitivamente juzgando, lo decretó y firmó el C. Lic. Indalecio Ojeda, Juez 1º suplente de Distrito, por impedimento del C. Juez propietario. Doy fé.—*Indalecio Ojeda.*—*Luis G. Medina.*

Es copia que certifico. Guanajuato, 17 de Setiembre de 1874.—*Luis G. Medina,* secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 15 de 1874.—Visto el recurso de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Nicolás Lazarin, Rafael Manriquez, Abraham Oliveros, Antonio Rangel y Cristóbal Soto, contra el Gefe Político de Apaseo, que los ha condenado á quince dias de prision y á servicios de policía y limpieza de las calles y sitios públicos, con violacion, segun manifiestan, de las garantías consignadas en los arts. 16, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitucion de la República; y

Considerando: Que no está justificada la infraccion de los artículos Constitucionales 16, 18, 19 y 20 que invocan los quejosos:

Que conforme al art. 21 de la Carta fundamental, las autoridades políticas solamente pueden imponer las penas de prision y de multa dentro de cierto límite, y en consecuencia, que el Gefe Político de Apaseo no ha tenido facultad para condenar á Nicolás Lazarin y socios, á trabajos de policía fuera de la prision:

Que la pena de limpieza de las calles y sitios públicos, tiene el carácter de infamante, y por lo mismo está comprendida en la

parte del art. 22 de la Constitución, que declara abolida la pena de infamia:

Que con respecto á la resistencia que opuso el C. Gefe Político de dar cumplimiento al auto de suspensión, decretado por el Juez de Distrito, apareciendo que dicha autoridad, requerida por su superior inmediato, suspendió al fin sus procedimientos; razon por la cual no es llegado el caso previsto por el art. 22 de la ley de 20 de Enero de 1869, para proceder á encausar á la expresada autoridad, por su resistencia.

Con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución federal y 22 de la ley de 20 de Enero de 1869, se decreta:

1º: Se confirma la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Guanajuato, en 26 de Agosto del presente año, en la parte que declara: Que la Justicia de la Unión ampara y protege á Nicolás Lazarín, Cristóbal Soto, Rafael Manríquez, Abraham Oliveros y Antonio Rangel contra los procedimientos del Gefe Político de Apaseo, que los condenó á barrer las calles y plazas y á otros trabajos de policía, violando así el art. 21 de la Constitución, que no autoriza para imponer estas correcciones, y el 22 que las prohíbe, porque imprimen infamia.

2º: Se revoca la parte de la misma sentencia, que dispone que devueltos que sean los autos por la Superioridad, se saquen testimonios de lo conducente para proceder á lo que en derecho haya lugar, contra el C. Domingo Rábago, Gefe Político de Apaseo, por haber desobedecido el auto de suspensión.

Devuélvensen los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*M. Ansa.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de*

Castañeda y Ndjera.—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

Es copia que certifico. México, Noviembre 6 de 1874.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, por el C. T. Rodriguez, en representacion de su hijo Austacio del mismo apellido, contra los autos del Alcalde 1º de Linares, que lo juzgó y sentenció á la última pena.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: Que las pruebas rendidas por la parte quejosa en este juicio de amparo, durante el término que conforme á la ley relativa tuvo á bien conceder el Juzgado, no bastan para destruir los fundamentos en que descansa el pedimento de 4 del corriente, contraído á que se deniegue el amparo que se solicita por Austacio Rodríguez contra el acto de la Autoridad política de la Ciudad de Linares, que lo juzgó y sentenció á la última pena, con arreglo á la ley de 3 de Mayo de 1873, por robo con asalto y muerte cometido á inmediaciones del rancho de "Caja pinta," en los primeros dias del mes de Marzo del corriente año; y por lo mismo, se ve en el duro pero preciso caso, de insistir en su referido pedimento, en ejercicio de su ministerio.

Las pruebas de que se ha hablado, tienden única y exclusivamente á justificar que la sentencia por la cual la autoridad de Linares condenó á muerte á Rodríguez, fué pronunciada fuera del término de 15 dias, que la citada ley de 3 de Mayo demarca en su art. 3º, para la conclusion del juicio cri-